

Los economistas rechazan el cupo vasco y catalán y urgen una reforma de la financiación que beneficiaría a Aragón

MADRID. El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) reclamaron ayer una reforma urgente del sistema de financiación autonómica en la que, de acuerdo a la población ajustada, Aragón sería de los territorios más beneficiados. Los expertos, no obstante, ven lejano el acuerdo entre PP y PSOE dada la situación política, por lo que plantean retoques iniciales, como un fondo de compensación a las comunidades infrafinanciadas. Además, avalan la propuesta del Gobierno central de condonar parte de la deuda regional pero rechazan el cupo catalán que ansían los independentistas.

Son las principales conclusiones de un foro celebrado en Madrid en el que quedó claro que las opciones reales de reformar el sistema de financiación esta legislatura son prácticamente nulas. «No se dan las condiciones», reconoció Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fedea. A su juicio, lo más adecuado sería un pacto entre los dos grandes partidos que se impusiera a las distintas sensibilidades territoriales. Pero el bloqueo y la crispación política lo hacen casi inviable.

Para Aragón, la reforma es de sumo interés, puesto que aun siendo una autonomía con un índice de financiación –levemente– por encima de la media, con el nuevo sistema mejoraría mucho. Según la Fedea, al actualizar los criterios de dispersión, despoblación y envejecimiento, la Comunidad sería, junto con Extremadura, la más beneficiada.

Los expertos admiten que esta variable es de las que más dificultan el acuerdo, puesto que «los cambios en población ajustada son de suma cero,

donde lo que suma uno lo pierde otro», dijo Diego Martínez-López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Medidas correctivas

Los economistas plantean, al menos, varias medidas correctivas previas y que no necesariamente deberían ser bloqueadas. Por un lado, apuestan por introducir un fondo transitorio de compensación para las cuatro comunidades que están por debajo de la media: Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Además, piden revisar el sistema de retenciones y entregas a cuenta para que las posibles subidas o bajadas de los impuestos autonómicos –y en especial las del tramo del IRPF– se trasladen inmediatamente a los contribuyentes y a las comunidades, en lugar de a dos años vista. También quieren mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos tradicionales y regular las escalas de referencia.

Las contrapartidas económicas planteadas por los partidos independentistas al Gobierno central a cambio de su apoyo también fueron objeto de debate. Los expertos avalan la condonación de la deuda autonómica, siempre que sea «parcial, condicionada y asimétrica», apuntó Martínez-López. Explicó que es la única forma de que las comunidades puedan salir a financiarse al mercado en condiciones aceptables. La opinión compartida fue la de rechazar un cupo catalán, por el cual la Generalitat pasaría a gestionar el 100% de los impuestos. «Nos cargaríamos el Estado», que pasaría a «vivir de la caridad de los territorios», dijo De la Fuente.

I. MUÑOZ